

125-19.61

Santiago de Cali, 13 de julio de 2017

CACCI 4476

Señor (a)

**DENUNCIA CIUDADANA No. DC-24-2017**

Guacari-Valle

ASUNTO: Informe Final Respuesta a Denuncia Ciudadana CACCI 906 DC-24- 2017

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca informa los resultados finales de lo actuado con respecto a la denuncia ciudadana del asunto, relacionada con las presuntas irregularidades en contratación en el Municipio de Guacari-Valle, inherentes al proceso de contratación de dotación de personal , contratos identificados en el SECOP con los números MCG-040-2016 y MCG-041-2016.

La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación procedió a dar trámite a la denuncia ciudadana, mediante visita fiscal al mencionado Municipio, para tal fin comisionó al Técnico Operativo adscrito a esta Dirección.

De la visita fiscal realizada a la Alcaldía Municipal de Guacari-Valle se obtuvo el siguiente resultado:

## **1. INTRODUCCION**

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, en cumplimiento de su función Constitucional, la misión Institucional y en desarrollo de las actividades descritas en los manuales de procesos y procedimientos, ha fortalecido la atención a las denuncias y peticiones allegadas a este Ente de Control.

Es por esto que se realiza la presente visita fiscal y se solicita la información relacionada con el tema de la denuncia a los funcionarios responsables, para tener un conocimiento más amplio de los presuntos hechos irregulares.

Se encargó a un Técnico Operativo adscrito a la Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana, quien tuvo en cuenta para el desarrollo del informe, la normatividad legal vigente, los procesos y procedimientos de la CDVC y toda la documentación e información recopilada.

El resultado final de la visita es consolidado en el presente informe, con el fin de dar a conocer a la comunidad en general los hechos evidenciados y responder satisfactoriamente a los requerimientos del denunciante.

## **2. ALCANCE DE LA VISITA**

La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana procede a dar trámite a la Denuncia Ciudadana DC-24-2016 con radicación CACCI-906, con base en la denuncia recibida en la Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana.

## **3. LABORES REALIZADAS**

En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución No. 524 del 2 de junio de 2017 proferida por el Despacho del Señor Contralor del Departamento del Valle del Cauca, el Técnico Operativo se hizo presente en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Guacari, propiamente en el Despacho del Alcalde Municipal, con la finalidad de ponerle en conocimiento el motivo de la visita por parte del comisionado, dejando a disposición la documentación e información necesaria para el esclarecimiento de los siguientes hechos:

***“Presuntas irregularidades en el desarrollo de los contratos MCG-040-2016, MCG-041-2016, cuyo objeto es el suministro de las dotaciones del personal de la Administración del Municipio de Guacari.***

- A. Determinar la razón por la cual el proceso para el suministro de las dotaciones se desarrolló en dos contratos generando presuntamente un fraccionamiento de contratos y poder realizarlo mediante la modalidad de mínima cuantía.*
- B. Establecer si se dio cumplimiento con la entrega en su totalidad de las dotaciones por parte del contratista*
- C. Establecer si se dieron las entregas de las dotaciones por parte de la Administración de Guacari en los términos fijados por el Artículo 2 del Decreto 1989.*
- D. Verificar la entradas y salidas de almacén de las dotaciones objeto de los contratos en referencia.*
- E. Verificar el uso de las dotaciones entregadas por la Administración Municipal de Guacari a los beneficiarios de esta.*

## **4. RESULTADO DE LA VISITA**

Con fundamento en los hechos antes mencionados, y con forme a la revisión, verificación y valoración de los documentos aportados por Administración Municipal de Guacari y los allegados en la Denuncia, se estableció lo siguiente.

**A. Determinar la razón por la cual el proceso para el suministro de las dotaciones se desarrolló en dos contratos generando presuntamente un fraccionamiento de contratos, realizando estos mediante la modalidad de mínima cuantía.**

Verificados los expedientes contractuales No MCG 040 de 2016 y MCG 041 de 2016 celebrados entre el Municipio de Guacarí con el Taller de Confecciones ROMY el 20 de Diciembre de 2016 cuyos objetos en su orden fueron: “*El diseño y confección de uniformes para dama y calzado para las funcionarias de planta de la Alcaldía Municipal de Guacarí (V)*” y “*El diseño y confección de uniformes para caballero y calzado para las funcionarios de planta de la Alcaldía Municipal de Guacarí (V)*”, el primero por valor de \$14.040.000 y el segundo por \$14.094.000, se pudo evidenciar un posible **FRACCIONAMIENTO DEL CONTRATO**, considerando que ambos contratos se podían generar en uno solo, debido a que era con el mismo contratista, en la misma fecha, y además tenía el mismo objeto. Sin embargo, dicha entidad dividió los contratos descritos anteriormente, observándose que al sumarse los valores previamente referenciados da un total de \$28.134.000, cuantía que supera el monto de la Mínima Cuantía, y que por lo tanto, debió de haberse celebrado a través del proceso de Menor Cuantía según certificación emitida por el Secretario de Hacienda del Municipio de Guacarí.

Frente a este tema la doctrina y la jurisprudencia colombiana se ha manifestado y ha concluido que:

*“(…) El FRACCIONAMIENTO DE CONTRATO, Ha sido una figura prohibida expresamente en los anteriores estatutos de contratación (decreto ley 150 de 1976 y decreto ley 222 de 1983), en los cuales en forma imperativa se negaba la posibilidad de fraccionar contratos, entendida ésta como la suscripción de dos o más contratos entre las mismas partes, con el mismo objeto, dentro un término, que la primera de las normatividades estableció en tres meses, y el estatuto de 1983, lo amplió a seis meses.*

*Si bien dicha figura no aparece dentro del estatuto actual en los mismos términos de los estatutos anteriores, ello obedece a la estructura misma de la ley 80, puesto que se pretendió terminar con la exagerada reglamentación y rigorismo y en cambio se determinaron pautas, reglas y principios, de los que se infiere la prohibición del fraccionamiento, y que se traduce en distintas disposiciones como la regla contenida en el numeral 8º del artículo 24, según la cual las autoridades no actuarán con desviación o abuso del poder y ejercerán sus competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley, y al propio tiempo les prohíbe eludir los procedimientos de selección objetiva y los demás requisitos previstos en dicho estatuto.*

*Finalmente, en los numerales 8º y 9º del referido artículo 24, se establecen ciertos deberes especiales a cargo de las autoridades. El primero de ellos hace referencia al principio general según el cual la conducta de tales autoridades debe ceñirse al principio de legalidad y a la finalidad de interés público que debe ser el único móvil de su actuación. Por ello se establece que no obrarán con abuso o desviación de poder y que deben observar los procedimientos de selección y los requisitos previstos en el estatuto. En este sentido no podrán, por ejemplo, con el fin de eludir tales procedimientos, fraccionar contratos u omitir los requisitos previos a la apertura de una licitación, o los de formación y perfeccionamiento de los contratos, so pena*

*de incurrir en las responsabilidades previstas en la misma ley”. (García González, Jorge. El Nuevo Régimen de Contratación Administrativa. Publicación del Ministerio de Gobierno. 1993. Pág. 65.”*

*Entonces hay fraccionamiento cuando hay identidad de especie, cuando se participa por ejemplo con tres contratos en la misma obra.” (Consejo de Estado. - Sala de Consulta y Servicio Civil. - 18 de diciembre 1989. M.P: Dr. Jaime Paredes. Radicación: No. 328”.*

## **1. Hallazgo Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria y Penal.**

Con referencia a los contratos No. MCG 040 de 2016 y MCG 041 de 2016, Verificados y celebrados entre el Municipio de Guacarí con el Taller de Confecciones ROMY el 20 de Diciembre de 2016, cuyos objetos en su orden fueron: *“El diseño y confección de uniformes para dama y calzado para las funcionarias de planta de la Alcaldía Municipal de Guacarí (V)”* y *“El diseño y confección de uniformes para caballero y calzado para las funcionarios de planta de la Alcaldía Municipal de Guacarí (V)”*, el primero por valor de \$14.040.000 y el segundo por \$14.094.000, se puede tipificar un posible **FRACCIONAMIENTO DE CONTRATO**, considerando que ambos contratos se podían generar en uno solo, toda vez que era el mismo contratista, la misma fecha, y el mismo objeto contractual, Sin embargo, el municipio dividió los contratos descritos, observándose que al sumarse los valores previamente referenciados da un total de \$28.134.000, cuantía que supera el monto de la Mínima Cuantía, y que por lo tanto, debió de haberse celebrado a través de otro proceso contractual.

Frente a este tema la doctrina y la jurisprudencia colombiana se ha manifestado y ha concluido que:

*“(…) El FRACCIONAMIENTO DE CONTRATO, Ha sido una figura prohibida expresamente en los anteriores estatutos de contratación (decreto ley 150 de 1976 y decreto ley 222 de 1983), en los cuales en forma imperativa se negaba la posibilidad de fraccionar contratos, entendida ésta como la suscripción de dos o más contratos entre las mismas partes, con el mismo objeto, dentro un término, que la primera de las normatividades estableció en tres meses, y el estatuto de 1983, lo amplió a seis meses.*

*Si bien dicha figura no aparece dentro del estatuto actual en los mismos términos de los estatutos anteriores, ello obedece a la estructura misma de la ley 80, puesto que se pretendió terminar con la exagerada reglamentación y rigorismo y en cambio se determinaron pautas, reglas y principios, de los que se infiere la prohibición del fraccionamiento, y que se traduce en distintas disposiciones como la regla contenida en el numeral 8º del artículo 24, según la cual las autoridades no actuarán con desviación o abuso del poder y ejercerán sus competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley, y al propio tiempo les prohíbe eludir los procedimientos de selección objetiva y los demás requisitos previstos en dicho estatuto.*

*Finalmente, en los numerales 8º y 9º del referido artículo 24, se establecen ciertos deberes especiales a cargo de las autoridades. El primero de ellos hace referencia al principio general según el cual la conducta de tales autoridades debe ceñirse al principio de legalidad y a la finalidad de interés público que debe ser el único móvil de su actuación. Por ello se establece que no obrarán con abuso o desviación de poder y que deben observar los procedimientos de*

*selección y los requisitos previstos en el estatuto. En este sentido no podrán, por ejemplo, con el fin de eludir tales procedimientos, fraccionar contratos u omitir los requisitos previos a la apertura de una licitación, o los de formación y perfeccionamiento de los contratos, so pena de incurrir en las responsabilidades previstas en la misma ley". (García González, Jorge. El Nuevo Régimen de Contratación Administrativa. Publicación del Ministerio de Gobierno. 1993. Pág. 65."*

*Entonces hay fraccionamiento cuando hay identidad de especie, cuando se participa por ejemplo con tres contratos en la misma obra." (Consejo de Estado. - Sala de Consulta y Servicio Civil. - 18 de diciembre 1989. M.P: Dr. Jaime Paredes. Radicación: No. 328"*

Se establece que posiblemente se está incumpliendo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, de igual manera con los principios de la contratación como son: TRANSPARENCIA, ECONOMIA y RESPONSABILIDAD consignados en la ley.

Irregularidad que fue ocasionada por omisiones en la aplicación de la norma, lo cual trajo como efecto la configuración de unas presuntas conductas disciplinables, al tenor de los numerales 1 del artículo 34 y 35 de la Ley 734 del 2002, como también de tipo penal, que genero de igual modo que no se garantizara un debido proceso en la escogencia del contratista, por omisiones en la aplicación de la norma al tenor de los artículo 409 y 410 de la Ley 599 del 2000.

***B. Establecer si se dio cumplimiento con la entrega en su totalidad de las dotaciones por parte del contratista.***

Con relación a la entrega de las dotaciones objeto de los contratos MCG-04 -2016 y MCG-041-2016 por parte del contratista, se pudo establecer que estas se entregaron en su totalidad y que como constancia de ello se observaron las Actas de Supervisión emitidas por parte de la supervisora Paola Andrea Duque Molina, Secretaria de Desarrollo Institucional, es pertinente manifestar que a Paola Andrea Duque Molina, en su calidad de supervisora se le debió de ser notificada de la labor asignada ,notificación que no existe dentro de la carpeta contractual.

**2. Hallazgo Administrativo.**

En la revisión de las carpetas de los contratos MCG-04-2016 y MCG-041-2016 los cuales se me fueron suministrados por la Administración Municipal de Guacari no se evidenció la notificación como Supervisora a Paola Andrea Duque Molina, Secretaria de Desarrollo Institucional, de los precitados contratos.

***C. Verificar la entradas y salidas de almacén de las dotaciones objeto de los contratos en referencia.***

En relación a las entradas y salidas del almacén de las dotaciones objeto de los contratos MCG-04-2016 y MCG-041-2016, se evidencio que estas se manejaron por fuera del programa que se tenía adquirido por la Administración Municipal para el 2016

denominado ASCCI, se evidencio que estas se manejaban en una hoja de Excel, manejo que no permite a la Administración tener un adecuado control de en la contabilidad relacionada con los inventarios que se encuentren en el mismo y permitiendo que se puedan generar pérdidas de elementos en el almacén, para la vigencia 2017 se adquiere un nuevo programa denominado SinapV5, con el cual se pretende manejar los inventarios del almacén y que a la fecha de la visita este no se encuentra en funcionamiento.

### **3. Hallazgo Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria.**

Los bienes objeto de los contratos MCG-04-2016 y MCG-041-2016, no se encuentran ingresados al módulo de almacén denominado ASCCI vigente para el 2016, lo cual no permito evidenciar un control de las entradas y salidas de los mismos, estas se están manejando mediante una hoja de Excel lo que no brinda ningún tipo de garantía para la entidad. Para la vigencia 2017, se adquiere un nuevo módulo denominado SinapV5, en el cual se pretende manejar los inventarios del almacén pero a la fecha este no se encuentra operando, siendo así las cosas la Administración Municipal no cuenta con un adecuado manejo de sus inventarios que le permitan establecer sus valores contablemente y en existencia del almacén, situación está que da origen a un Hallazgo Administrativo Administrativa con Presunta Incidencia Disciplinaria al trasgredir el Numeral 1 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002.

#### ***D. Establecer si se dieron las entregas de las dotaciones por parte de la Administración de Guacari en los términos fijados por el Artículo 2 del Decreto 1978 de 1989.***

En relación al cumplimiento de la entrega de las dotaciones a los funcionarios de la Administración Municipal de Guacari, es pertinente manifestar que la Administración Municipal tiene la obligatoriedad de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículo 1 y 2 del Decreto 1978 de 1989, situación que al ser verificada en los documentos soportes de los contratos MCG-040-2016 y MCG-041-2016 se pudo constatar que no se desarrolló acorde al precitado Decreto, lo que da lugar a la conformación de un Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria.

### **4. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria**

La Administración Municipal de Guacari , tiene la obligatoriedad de dar cumplimiento al Decreto 1978 de 1989, el cual hace referencia al suministro de dotación a sus funcionarios que devenguen menos de dos salarios mínimos, no obstante esta se debe suministrar cada cuatro meses y que para ello se fijaron las siguientes fechas, primer entrega 30 de abril, segunda entrega 31 de agosto y tercer entrega 30 de diciembre, se evidencio que con relación a las dotaciones correspondientes a la vigencia 2016, estas fueron entregadas entre los meses de enero y febrero del 2017, como se observó en los listados de entrega suministrados por la Supervisora de los contratos, Paola Andrea Duque Molina, con relación a la vigencia 2017, no se ha iniciado trámite alguno para darle cumplimiento del precitado Decreto y que a la fecha de la visita todavía no se había



realizado la entrega de la primera dotación a los funcionarios, la cual venció el día 30 de abril de 2017, siendo así las cosas es como se pudo configurar una Observación Administrativa con presunta Incidencia Disciplinaria al no dar cumplimiento del Numeral 1 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002 al trasgredir el Artículo 2 del Decreto 1978 de 1989.

***E. Verificar el uso de las dotaciones entregadas por la Administración Municipal de Guacarí a los Beneficiarios de esta.***

En relación al uso de las dotaciones entregadas por la Administración Municipal de Guacarí a los funcionarios beneficiados de estas, se evidencio que estos en gran parte no están dándole uso, y es pertinente manifestar que si bien es cierto que la Administración está en la obligación de darle cumplimiento a los artículos 1 y 2 del Decreto 1978 de 1989, este en su artículo 7 obliga al uso de los mismo so pena de dejar libre a la empresa de la obligación correspondiente.

Que de este modo se evidencio que la Administración Municipal, emitió la circular interna No. 1000-16-01-38 de febrero 27 de 2017, en la cual se establece los días para dar uso de las dotaciones suministradas, las cuales no son acatadas por gran parte del personal y que para ello se tomó declaraciones a una parte de los funcionarios que en el momento no portaban la dotación correspondiente al día Jueves, prueba de ello son las entrevistas realizadas y firmadas por los mismos.

**5. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria.**

Se pudo verificar que la Administración efectuó la entrega de las dotaciones a que está obligada mediante el Decreto 1978 de 1989, pero que los funcionarios beneficiados de este no están dando cumplimiento al artículo 7 del precitado Decreto, como tampoco a la Circular interna No. 1000-16-01-38 de febrero 27 de 2017, que en virtud del desacato por parte de algunos funcionarios, al no uso de las dotaciones la Administración Municipal no ha iniciado ningún tipo de Acción Disciplinaria, que demuestre exigibilidad de dichas normas, siendo así las cosas se configura un Hallazgo Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria al no dar cumplimiento del Numeral 1 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002 al trasgredir el Artículo 7 del Decreto 1978 de 1989 y la Circular Interna No. 1000-16-01-38 de febrero 27 de 2017.

**5. CONCLUSIONES**

Como resultado de la Visita Fiscal realizada a la Alcaldía Municipal de Guacarí, se estableció la conformación de 5 hallazgos Administrativos, de los cuales 4 con una presunta connotación Disciplinaria y uno (1) con presunta incidencia penal.

De esta manera queda debidamente tramitada y diligenciada la Denuncia Ciudadana DC-24-2017.

En espera de que con la presente se de claridad sobre las causales de la denuncia y atentos a cualquier aclaración.

Copia de este informe se remite a la Dirección Operativa de Control Fiscal para la respectiva evaluación al Plan de mejoramiento que suscriba el Municipio de Guacari, como producto de los hallazgos administrativos generados con la atención a esta denuncia, el cual tendrá un término de 15 días para suscribirlo y remitirlo a través del Sistema de Rendición en Línea RCL de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, siguiendo los planteamientos de la Resolución # 001 de Enero 22 de 2016.

En cumplimiento de los procedimientos establecidos por la Contraloría Departamental del Valle, anexo la encuesta de Percepción de la oportunidad en la respuesta en un (1) folio para ser remitida a esta dependencia una vez diligenciada a la Carrera 6 entre Calles 9 y 10 Edificio Gobernación del Valle del Cauca Piso 6 en Cali, así mismo puede ser enviada a través del correo electrónico [participacionciudadana@contralariavalledelcauca.gov.co](mailto:participacionciudadana@contralariavalledelcauca.gov.co) o directamente al link <https://goo.gl/forms/86ptHQXNISQgYCXk1>

Cordialmente,

(Original firmado)

ALEXANDER SALGUERO ROJAS  
Director Operativo de Comunicaciones y Participación Ciudadana

Copia: CACCI 906 DC-24- 2017  
[alcaldia@guacari-valle.gov.co](mailto:alcaldia@guacari-valle.gov.co)  
[diegolopez@cdvc.gov.co](mailto:diegolopez@cdvc.gov.co)  
[nestormontoya@cdvc.gov.co](mailto:nestormontoya@cdvc.gov.co)

*Trascribió: Amparo Collazos Polo –Profesional Especializada*



6. ANEXOS  
6.1. CUADRO DE HALLAZGOS

Municipio de Guacarí DC-24-2017								
No.	HALLAZGOS	RESPUESTA DE LA ENTIDAD	CONCLUSIÓN AUDITORIA	TIPO DE HALLAZGOS				
				A	S	D	P	F
1	<p>Con referencia a los contratos No MCG 040 de 2016 y MCG 041 de 2016, Verificados y celebrados entre el Municipio de Guacarí con el Taller de Confecciones ROMY el 20 de Diciembre de 2016, cuyos objetos en su orden fueron: “<i>El diseño y confección de uniformes para dama y calzado para las funcionarias de planta de la Alcaldía Municipal de Guacarí (V)</i>” y“ <i>El diseño y confección de uniformes para caballero y calzado para las funcionarios de planta de la Alcaldía Municipal de Guacarí</i>”, el primero un posible <b>FRACCIONAMIENTO DE</b> por valor de \$14.040.000 y el segundo por \$14.094.000, se puede tipificar <b>CONTRATO</b>, considerando que ambos contratos se podían generar en uno solo, toda vez que era el mismo contratista, la misma fecha, y el mismo objeto contractual, Sin embargo, el municipio dividió los contratos descritos, observándose que al sumarse los valores previamente referenciados da un total de \$28.134.000, cuantía que supera el monto de la Mínima Cuantía, y que por lo tanto, debió de haberse celebrado a través de otro proceso contractual.</p> <p>Frente a este tema la doctrina y la jurisprudencia colombiana se ha manifestado y ha concluido que:</p>	<p>Que los contratos MCG-040-2016 y MCG-041-2016, no corresponden a un mismo objeto contractual como se dice equivocadamente en el informe preliminar de la Contraloría departamental, pues señala el objeto del contrato MCG-040-2016, lo siguiente: “<b><i>Diseño y confección de Uniformes para dama y calzado para las funcionarias de planta de la Alcaldía Municipal de Guacarí Valle</i></b>”, por su parte el Objeto del contrato MCG-041-2016, establece: “<b><i>Suministro de Pantalones, Camisas y calzado para Hombre, para ser entregados como uniformes corporativos en dotación a los funcionarios de planta de la Alcaldía Municipal de Guacarí Valle</i></b>”. Como puede observarse una cosa es el Diseño y confección de ropa para dama y otra muy distinta es el suministro de pantalón y camisa para hombre, lo cual permite inferir de manera clara que se trata de objetos contractuales totalmente distintos, por lo anterior a criterio de esta entidad, no se cumple con los postulados señalados por la contraloría en su informe para darse la figura de fraccionamiento de contrato en cuanto al mismo objeto, mismo contratista y misma fecha.</p> <p>Como prueba de lo anterior me permito anexar copia autentica del estudio previo</p>	<p>Analizado el Derecho de Contradicción ejercido por la entidad cabe resaltar que en los contratos MCG-040-2016 y MCG-041-2016. <b><i>El objeto, conforme a sus especificaciones, su finalidad, su necesidad y el contratista son los mismos</i></b>, lo cual se puedo evidenciar en los estudios previos.</p> <p>Por lo anterior estamos frente a un posible fraccionamiento de contrato.</p> <p>Es oportuno manifestar que el contrato MCG-041-2016 Se cotizo en dos almacenes diferentes de Confecciones, el primero llamado el café de oro con Nit 38.852.302-3 y el segundo llamado uniformes industriales con Nit 2.631.822-2, en ambos se cotiza la confección de uniformes para hombres y mujeres con sus respectivos zapatos.</p> <p>Teniendo clara esta apreciación se consideró que existe una clara evidencia que ambos</p>	X		X	X	

<p><i>“(…) El FRACCIONAMIENTO DE CONTRATO, Ha sido una figura prohibida expresamente en los anteriores estatutos de contratación (decreto ley 150 de 1976 y decreto ley 222 de 1983), en los cuales en forma imperativa se negaba la posibilidad de fraccionar contratos, entendida ésta como la suscripción de dos o más contratos entre las mismas partes, con el mismo objeto, dentro un término, que la primera de las normatividades estableció en tres meses, y el estatuto de 1983, lo amplió a seis meses.</i></p> <p><i>Si bien dicha figura no aparece dentro del estatuto actual en los mismos términos de los estatutos anteriores, ello obedece a la estructura misma de la ley 80, puesto que se pretendió terminar con la exagerada reglamentación y rigorismo y en cambio se determinaron pautas, reglas y principios, de los que se infiere la prohibición del fraccionamiento, y que se traduce en distintas disposiciones como la regla contenida en el numeral 8º del artículo 24, según la cual las autoridades no actuarán con desviación o abuso del poder y ejercerán sus competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley, y al propio tiempo les prohíbe eludir los procedimientos de selección objetiva y los demás requisitos previstos en dicho estatuto.</i></p> <p><i>Finalmente, en los numerales 8º y 9º del referido artículo 24, se establecen ciertos deberes especiales a cargo de las autoridades. El primero de ellos hace</i></p>	<p>y aceptación de oferta de los procesos de selección de Mínima Cuantía MCG-040-2016 y MCG-041 de 2016.</p> <p>Ahora bien, en cuanto al tema de fraccionamiento de contratos, es pertinente citar los diferentes pronunciamientos de la jurisprudencia, los conceptos y guías establecidos por Colombia Compra eficiente, las cuales se relacionan y analizan a continuación:</p> <p>La Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección tercera, Subsección 3, Consejera Ponente: Olga Melida Valle de la Hoz, de fecha 31 de enero de 2011; Radicación: 25000-23-26-000-1995-00867-01(17767), señala:</p> <p><i>De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, la contratación estatal tiene como fin, “la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines”. Al efecto, el legislador dispuso que las actuaciones contractuales de las entidades estatales deben supeditarse al cumplimiento de los principios de la contratación estatal. El principio de transparencia dispone que la selección de los contratistas debe “edificarse sobre las bases de i) la igualdad respecto de todos los interesados; ii) la objetividad, neutralidad y claridad de la reglas o condiciones impuestas para la presentación de las ofertas; iii) la garantía</i></p>	<p>contratos tienen la misma finalidad la cual es dotar de vestido de labor a los empleados (mujeres y hombres) mediante la interpretación de la ley 70 de 1988.</p> <p>Por lo tanto queda claro que si existe una cotización para la confección de los uniformes para los hombres, el objeto del contrato No. MCG 041-2016 NO es: <i>El Suministro de pantalones, camisas y calzado para hombre, para ser entregados como uniformes corporativos en dotación a los funcionarios de planta de la Alcaldía Municipal de Guacarí-Valle, sino <b>EL DISEÑO Y CONFECCION</b></i>. Igual que el otro contrato MCG 040 - 2016.</p> <p>Es por ello que el hallazgo queda en firme debido a que los argumentos de la entidad no desvirtúan lo observado.</p>						
---	---	--	--	--	--	--	--	--

<p>referencia al principio general según el cual la conducta de tales autoridades debe ceñirse al principio de legalidad y a la finalidad de interés público que debe ser el único móvil de su actuación. Por ello se establece que no obrarán con abuso o desviación de poder y que deben observar los procedimientos de selección y los requisitos previstos en el estatuto. En este sentido no podrán, por ejemplo, con el fin de eludir tales procedimientos, fraccionar contratos u omitir los requisitos previos a la apertura de una licitación, o los de formación y perfeccionamiento de los contratos, so pena de incurrir en las responsabilidades previstas en la misma ley". (García González, Jorge. El Nuevo Régimen de Contratación Administrativa. Publicación del Ministerio de Gobierno. 1993. Pág. 65."</p> <p>Entonces hay fraccionamiento cuando hay identidad de especie, cuando se participa por ejemplo con tres contratos en la misma obra." (Consejo de Estado. - Sala de Consulta y Servicio Civil. - 18 de diciembre 1989. M.P: Dr. Jaime Paredes. Radicación: No. 328"</p> <p>Se establece que posiblemente se está incumpliendo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, de igual manera con los principios de la contratación como son: TRANSPARENCIA, ECONOMIA y RESPONSABILIDAD consignados en la ley.</p> <p>Irregularidad que fue ocasionada por omisiones en la aplicación de la norma, lo</p>	<p>del derecho de contradicción; iv) la publicidad de las actuaciones de la administración; v) la motivación expresa, precisa y detallada del informe de evaluación, del acto de adjudicación o de la declaratoria de desierta; vi) la escogencia objetiva del contratista idóneo que ofrezca la oferta más favorable para los intereses de la administración". Con el objetivo de limitar la discrecionalidad del administrador público, se impone el cumplimiento de requisitos y procedimientos que garantizan la selección de la mejor propuesta para satisfacer el objeto del contrato a suscribir. En este orden de ideas, la suscripción del contrato debe estar precedida, de acuerdo con la letra del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 de <u>un proceso de licitación o concurso público y</u>, excepcionalmente, de un proceso de contratación directa. (...) Es en desarrollo del principio de transparencia que se impone la obligación de realizar los procesos de licitación, concurso o contratación directa "sin tener en consideración favores o factores de afecto o de interés" Lo anterior, con el objetivo de garantizar el derecho a la igualdad entre los oferentes y evitar el favorecimiento indebido, por cuanto se estarían desconociendo los principios de igualdad e imparcialidad. (negrilla fuera de texto)</p> <p>De lo anterior y con relación a los contratos MCG-040-2016 y MCG-041-2016, se observa que en ningún momento se vulneraron los principios que regulan la</p>							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

	<p>cual trajo como efecto la configuración de unas presuntas conductas disciplinables, al tenor de los numerales 1 del artículo 34 y 35 de la ley 734 del 2002, como también de tipo penal, que genero de igual modo que no se garantizara un debido proceso en la escogencia del contratista, por omisiones en la aplicación de la norma al tenor de los artículo 409 y 410 de la ley 599 del 2000.</p>	<p>contratación, pues con relación al principio de transparencia los procesos contractuales de la referencia fueron realizados a través de la modalidad de contratación de Mínima cuantía, se garantizó la participación y pluralidad de oferentes al ser un proceso que se publicó en el SECOP en los términos y durante el término que establece la norma, se garantizó igualmente la selección objetiva del contratista, y se cumplió en estricto sentido con lo señalado en la artículo 24 de la ley 80 de 1993, en cuanto los mencionados proceso de contratación fue precedido por el correspondiente proceso de contratación, es decir, que no se puede hablar de que la entidad actuó con desviación de poder y sin observar los requisitos de procedimiento de selección puesto que la Administración Municipal, acudió al procedimiento de Invitación Pública siendo esta una característica propia de la modalidad de selección de mínima cuantía constituida como una regla general en materia de Contratación Estatal, en este sentido los procesos MCG-040-2016 y MCG-041-2016, fueron publicados en el SECOP el día 19 de diciembre de 2016 a las 10:15 AM y 10:20 AM, respectivamente permanecieron publicados por el término de un día, se hizo la correspondiente publicación de acta de cierre, se realizó la verificación de los requisitos habilitantes, se publicó la evaluación, se garantizó la presentación de las observaciones al proceso y se publicó la correspondiente aceptación de la oferta. Todo ello demuestra que se dio aplicación al Principio de transparencia.</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>De otra parte, señala la sentencia referida lo siguiente:</p> <p><i>El principio de economía pretende que la actividad contractual “no sea el resultado de la improvisación y el desorden, sino que obedezca a una verdadera planeación para satisfacer necesidades de la comunidad” (...). Este principio exige al administrador público el cumplimiento de “procedimientos y etapas estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable (...)”. En efecto, el artículo 25 de la Ley 80 de 1993 especifica que dichos requisitos deben cumplirse con anterioridad a la apertura de los procesos licitatorios o invitaciones a proponer, y en todo caso, nunca después de la suscripción de los contratos. (...) El principio de responsabilidad, impone al servidor público la rigurosa vigilancia de la ejecución del contrato, incluida la etapa precontractual, por cuanto atribuye la obligación de realizar evaluaciones objetivas sobre las propuestas presentadas, de acuerdo con los pliegos de condiciones efectuados con anterioridad. El principio de responsabilidad se encuentra el principio de selección objetiva en virtud del cual “la oferta que sea seleccionada deberá ser aquella que haya obtenido la más alta calificación como resultado de ponderar los factores o criterios de selección establecidos en los documentos de la licitación, concurso o contratación directa” (...) También se impone a la</i></p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		administración la obligación de actuar de buena fe en la elaboración de los estudios que sustentan la necesidad de la contratación, por cuanto éstos salvan de la improvisación, la ejecución misma del objeto contractual. El principio de buena fe se encuentra estrechamente relacionado con el principio de planeación que, como pilar de la actividad negocial, exige que la decisión de contratar responda a necesidades identificadas, estudiadas, evaluadas, planeadas y presupuestadas previamente a la contratación por parte de la administración. Para lograrlo, se debe velar igualmente por el cumplimiento del principio de publicidad en virtud del cual se debe poner a disposición de los administrados, las actuaciones de la administración, con el objetivo de garantizar su transparencia y permitir la participación de quienes se encuentren interesados. Finalmente, la efectividad del principio de igualdad “depende de un trato igualitario a todos los oferentes tanto en la exigencia de los requisitos previstos en el pliego de condiciones, como en la calificación de sus ofertas y, por supuesto, en la selección de aquella que resulte más favorable para los intereses de la administración”. Al momento de contratar, el Estado está en la obligación de definir los fundamentos de la participación de los oferentes y los criterios de evaluación con rigurosa aplicación de los principios de transparencia, economía, responsabilidad, selección objetiva, buena fe, planeación, publicidad e igualdad, entre otros, con el objeto de cumplir los fines propios de la contratación estatal. Lo anterior, para						
--	--	--	--	--	--	--	--	--



		<p><i>evitar la nulidad absoluta de los contratos que sean suscritos sin el cumplimiento de los requisitos necesarios para su validez. (...)</i></p> <p>Sobre este aspecto es de tener en cuenta que la Administración municipal con la celebración de los contratos MCG-040-2016 y MCG-041-2016, dio aplicación al principio de economía, puesto que busco adelantar un proceso legalmente valido y ágil que garantizara la escogencia objetiva de contratistas y la entrega de la dotación requerida para el personal que labora en la administración municipal,</p> <p>Así mismo, es de señalar que se dio aplicación al principio de responsabilidad en cuanto se realizó la evaluación objetiva de las propuestas presentadas en los procesos y la administración actuó en todas las etapas del proceso, vigilando y garantizando el estricto cumplimiento de la realización de los contratos.</p> <p>Finalmente la sentencia señala respecto del fraccionamiento de contrato lo siguiente:</p> <p><i>Cuando la contratación directa se realiza burlando el proceso licitatorio a través del fraccionamiento del contrato, es decir, buscando que ninguno de los contratos resultantes de dividir un mismo objeto supere el monto de la cuantía requerida para la licitación, se están desconociendo los principios que inspiran la contratación pública. Al respecto, aunque la conducta de fraccionar los contratos no está</i></p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p><i>prohibida expresamente en la Ley 80 de 1993, la jurisprudencia y la doctrina han sido claras en que la prohibición está implícita si tenemos en cuenta los aspectos esenciales de los principios y reglas que informan el estatuto contractual. En efecto, se ha considerado que “Si bien dicha figura no aparece dentro del estatuto actual en los mismos términos de los estatutos anteriores, ello obedece a la estructura misma de la ley 80, puesto que se pretendió terminar con la exagerada reglamentación y rigorismo y en cambio se determinaron pautas, reglas y principios, de los que se infiere la prohibición del fraccionamiento, y que se traduce en distintas disposiciones como la regla contenida en el numeral 8º del artículo 24, según la cual las autoridades no actuarán con desviación o abuso del poder y ejercerán sus competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley, y al propio tiempo les prohíbe eludir los procedimientos de selección objetiva y los demás requisitos previstos en dicho estatuto”. (...) Esta Corporación en sentencia del 3 de octubre de 2000, expresó que los principios de la contratación estatal se violan cuando “se celebran directamente varios contratos, cada uno de menor cuantía y todos con el mismo objeto, si sumadas sus cuantías resulta ser que se contrató un objeto único, por cuantía superior, que por lo mismo debió ser materia de licitación o concurso. Y eso es fraccionar lo que, en realidad, constituye un solo contrato, y eludir el cumplimiento de la ley (...) Pero, ¿cuándo se trata de un mismo objeto?</i></p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

		<p>Ahora bien es necesario resaltar de acuerdo a lo referido en la sentencia que lo que se busca con el fraccionamiento es evadir el proceso de licitación, cosa que no se ha presentado en los procesos de contratación referidos, puesto que los mismos fueron sometidos a proceso de licitación pública mediante Invitación Publica para seleccionar el contratista bajo la modalidad de mínima cuantía, y no a través de contratación directa.</p> <p>De otra parte, Colombia Compra Eficiente en el acápite de Síntesis Normatividad y Jurisprudencia en Contratación, sobre el tema de contratos sin cumplimiento de requisitos legales ha definido el fraccionamiento de contrato como: <i>“La figura mediante la cual los ordenadores del gasto con desconocimiento total de los principios que rigen la contratación pública, evitan acudir a la licitación pública, el cual se constituye en un requisito esencial en razón de la cuantía del contrato. En efecto, el fraccionamiento de contratos pretende dividir el objeto principal en diferentes contratos y con ello tener la facultad de seleccionar directamente los varios contratistas que ejecutarán los contratos que, examinados en un contexto global, constituyen un solo proyecto”</i>, en complemento de lo anterior Colombia Compra eficiente ha establecido una serie de ejemplos donde se puede dar la figura de fraccionamiento de contratos ellos son:</p> <p><i>Suscribir varios contratos mediante la</i></p>							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

		<p><i>modalidad de contratación directa, cuyo objeto, al examinarse en un contexto global, constituyen un solo proyecto</i></p> <p><i>Dividir en cinco (5) partes un contrato, teniendo los cinco una misma finalidad (género), aunque sus objetos contractuales sean prestaciones distintas (especie), ignora por completo el concepto de “unidad natural del objeto contractual” y por ende, que en el caso particular “sí resulta predicable la unidad de objeto respecto de los contratos cuya legalidad se cuestiona.</i></p> <p><i>Celebrar tres contratos relacionados con un mismo e idéntico objeto contractual, mediante la modalidad de contratación directa, aduciendo apremio para cumplir una obligación con un tercero.</i></p> <p><i>Dividir el objeto de un contrato para eludir el procedimiento de licitación pública y así mismo favorecer a los que finalmente fueron los contratistas.</i></p> <p><i>Celebrar a través de delegatario varios contratos que evidencian el fraccionamiento del objeto contractual, así como el exceso del monto fijado para contratar por la vía de la delegación.</i></p> <p><i>Celebrar varios contratos que tienen el mismo objeto y que ameritaban la apertura de un proceso de licitación pública, omitiendo realizar procedimiento de licitación pública por sus costos.</i></p> <p><i>Celebrar varios contratos sobre un mismo</i></p>							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

		<p><i>objeto en la modalidad de contratación directa, con el fin de eludir el mecanismo de selección correspondiente.</i></p> <p><i>Fraccionar un contrato para proceder a la contratación directa y, adicionalmente, omitir invitar a otros proponentes y dejar de allegar al trámite el pliego de condiciones de la obra por ejecutar.</i></p> <p>Como puede observarse ninguna de las anteriores causales ni la definición de fraccionamiento encuadran o se ajustan al caso de los procesos contractuales MCG-040-2016 y MCG-041-2016, pues en los mismos en ningún momento se fraccio el objeto de un contrato (puesto que los objetos son diferentes) para evadir el proceso de licitación y realizar la contratación de manera directa, por el contrario, en dichos procesos se garantizó la licitación pública al llevar acabo dos procesos mediante Invitación Publica, el modo de selección de contratista fue a través de un proceso de mínima cuantía y no de contratación directa; al realizar el proceso de contratación a través de esta figura se garantizó mayor transparencia, mayor participación de oferentes y agilidad en el proceso de contratación.</p> <p>Finalmente es necesario señalar que en la etapa de planeación de los procesos contractuales y ceñidos a la normatividad vigente como lo es el Decreto 1082 de 2015, y los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, se procedió adelantar los respectivos estudios de sector, estudios previos y definir la modalidad de</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



		<p>contratación, donde se tuvo en cuenta los procesos contractuales similares adelantados por la administración municipal en anteriores vigencias, encontrando que para los años 2013, 2014 y 2015, se efectuó por parte de la Administración Municipal de la época se realizó el mismo procedimiento de contratación para la dotación de empleados, sin observarse que en las auditorías integrales realizadas por la Contraloría Departamental a las vigencias 2013, 2014, se observen hallazgos donde se señale como en el presente caso existe un posible fraccionamiento de contratos por llevar a cabo dos procesos contractuales referentes a la dotación de empleados con objetos diferentes; lo anterior se puede corroborar en la página del SECOP donde se encuentran publicados los procesos de contratación ellos son:</p> <p><b>MCG-046-2013</b>, Objeto: Suministro de pantalones, camisas y calzado para hombre, para ser entregados como dotación a los funcionarios de planta de la Alcaldía Municipal de Guacarí Valle; Valor (\$11, 713,680)</p> <p><b>MCG-047-2013</b>, Objeto: Diseño y confección de conjuntos para dama, y calzado para ser entregados como dotación a las funcionarias de planta de la Alcaldía Municipal de Guacarí-Valle; (\$16.200.000)</p> <p><b>MCG-047-2014</b>, Objeto: Diseño y Confección de conjuntos para dama, y</p>							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

		<p>calzado para ser entregados como dotación a las funcionarias de planta de la Alcaldía Municipal de Guacarí-Valle. Valor (\$15,618,240)</p> <p><b>MCG-048-2014</b>, Objeto: Suministro de pantalones, camisas y calzado para hombre, para ser entregados como uniformes corporativos en dotación a los funcionarios de planta de la Alcaldía Municipal de Guacarí- Valle; Valor (\$15,516,160)</p> <p><b>MCG-031-2015</b>, Objeto: Suministro de pantalones, camisas y calzado para hombre, para ser entregados como uniformes corporativos en dotación a los funcionarios de planta de la Alcaldía Municipal de Guacarí-Valle, Valor (\$12,760,000)</p> <p><b>MCG-030-2015</b>, Objeto: Diseño y confección de conjuntos para dama, y calzado para ser entregados como dotación a las funcionarias de planta de la Alcaldía Municipal de Guacarí-Valle. Valor (\$12,787,200)</p> <p>De lo anterior es preciso mencionar que a Administración municipal actual ha tenido como base para realizar esta contratación los procesos similares efectuados en anteriores vigencias por la Administración y ha confiado en los criterios que ha tenido la Contraloría Departamental al momento de realizar las auditorías regulares de los años 2013 y 2014, donde no se realizaron observación a esta modalidad de contratación, pese a ser la</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>misma que ha utilizado el actual gobierno y que hoy es objeto de observación por parte de ese órgano de control, por ello esta entidad hace un llamado a la unidad de criterio por parte de la Contraloría Departamental en el presente caso.</p> <p>Por lo expuesto anteriormente solicito respetuosamente desvirtuar el hallazgo y su presunta incidencia disciplinaria y penal.</p>							
2	<p>Se evidencio que en la revisión de las carpetas de los contratos MCG-04-2016 y MCG-041-2016 los cuales se me fueron suministrados por la Administración Municipal de Guacarí no se encontró la debida notificación como supervisora a la Dra. Paola Andrea Duque Molina, Secretaria de Desarrollo Institucional, de los precitados contratos.</p>	<p>Con relación a esta observación Se adjunta copia de los oficios de asignación de supervisión, relacionado con los MCG-04-2016 y MCG-041-2016, los cuales estaban en poder de la Supervisora, los cuales se hallaban por error de archivo en carpeta de otro contrato.</p>	<p>Siendo la 4:53 de la tarde del día 22 de julio de 2017, se recibe vía correo electrónico la respuesta al derecho de contradicción de la DC-24-2017 CACCI-906, que en relación a la respuesta emitida por la Administración Municipal, se manifiesta aportan las copias de los oficios en los cuales se realiza la designación de la Dra. Paola Andrea Duque como supervisora de los contratos MCG-04-2016 y MCG-041-2016, haciendo la aclaración que estas se encontraban en expedientes diferentes, situación que denota la no existencia de un adecuado auto control de los documentos que hacen parte de los expedientes contractuales, teniéndose en cuenta que los documentos objeto de la observación son indispensable para el supervisor y este debe de velar por que se encuentre dentro de la carpeta correspondiente, pero como</p>	X					

			ellos mismos lo manifiestan en el derecho de contradicción son archivados en expedientes diferentes, ratificando esto el no uso de la trazabilidad de las carpetas e inadecuado archivo de los mismos, por lo tanto la observación no se levanta y queda ratificada.						
3	Se observó que los bienes objeto de los contratos MCG-04-2016 y MCG-041-2016, no se encuentran ingresados al módulo de almacén denominado ASCCI vigente para el 2016, lo cual no permito evidenciar un control de las entradas y salidas de los mismos, estas se están manejando mediante una hoja de Excel lo que no brinda ningún tipo de garantía para la entidad. Para la vigencia 2017, se adquiere un nuevo módulo denominado SinapV5, en el cual se pretende manejar los inventarios del almacén pero a la fecha este no se encuentra operando, siendo así las cosas la Administración Municipal no cuenta con un adecuado manejo de sus inventarios que le permitan establecer sus valores contablemente y en existencia del almacén, situación está que da origen a una Observación Administrativa con Presunta Incidencia Disciplinaria al trasgredir el Numeral 1 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002.	<p><i>La Corte Constitucional en Sentencia C-823 de 2006, M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño ha abordado la clasificación y definición de las prestaciones sociales en los siguientes términos:</i></p> <p><i>La ley laboral clasifica las prestaciones sociales a cargo del empleador en los siguientes dos grandes grupos:</i></p> <p><i>Las prestaciones sociales comunes, que son aquellas que corren a cargo de todo empleador independientemente de su capital. Pertenecen a esta especie las prestaciones por accidente y enfermedad profesional, el auxilio monetario por enfermedad no profesional, <b><u>el calzado y vestido de labor</u></b>, la protección a la maternidad, el auxilio funerario y el auxilio de cesantía. (Negrilla fuera de Texto)</i></p> <p><i>Las prestaciones sociales especiales, que por el impacto económico que conllevan, están a cargo de ciertas empresas atendiendo a su capital, como son la pensión de jubilación, el auxilio y las pensiones de invalidez, escuelas, especialización, primas, servicios y el seguro de vida colectivo.</i></p>	Siendo la 4:53 de la tarde del día 22 de julio de 2017, se recibe vía correo electrónico la respuesta al derecho de contradicción de la DC-24-2017 CACCI-906, que en relación a la respuesta emitida por la Administración Municipal, no se desconoce que conforme a la sentencia citada esta sea <b><i>una prestación social consistente en la entrega gratuita y material de un vestido y un calzado a cargo del empleador</i></b> , lo que sí es claro es que efectivamente si se tiene una obligatoriedad de ingresar estos elementos al almacén y ser registrados en el módulo ASCII, como se tiene definido en la Actividad No. 7 del procedimiento del almacén, el cual se fue corroborado en el desarrollo de la visita, de la misma manera manifiesta la Administración que el modulo ASCII dejo de funcionar el 30 de diciembre de 2016, debido a que se adquiere un nuevo programa denominado Sinap V5, el cual	X		X			

	<p>Por su parte la Ley 70 de 1988 y su Decreto Reglamentario 1978 de 1989 definen que la dotación de calzado y vestido de labor es una prestación que debe ser otorgada <b>de manera periódica durante la vigencia de la relación de trabajo</b> a los empleados públicos y trabajadores oficiales que devenguen hasta dos veces el salario mínimo legal vigente y que hubiesen cumplido más de tres meses al servicio de la entidad empleadora. Así entonces tenemos:</p> <p>Que el Decreto 1978 de 1989, <i>“por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 70 de 1988”</i>, establece:</p> <p><b>“ARTÍCULO 5º.</b> <i>Se consideran como calzado y vestido de labor , para los efectos de la Ley 70 de 1988 y de este Decreto, las prendas apropiadas para la clase de labores que desempeñan los trabajadores beneficiarios, de acuerdo con el medio ambiente en donde cumplen sus actividades.”</i></p> <p><b>“ARTÍCULO 7º.</b> <i>Los beneficiarios de la dotación de calzado y vestido de labor quedan obligados a recibirlos debidamente y a destinarlos a su uso en las labores propias de su oficio, so pena de liberar a la empresa de la obligación correspondiente.”</i></p> <p>De conformidad con las normas citadas, se tiene que la <b>dotación es una prestación social consistente en la entrega gratuita y material de un vestido y un calzado a cargo del</b></p>	cuenta con el módulo de Inventarios en el que se migraría toda la información, pero para la fecha de la visita este continua aún sin funcionamiento, pese a los requerimientos realizados por la almacenista según oficios con radicado en ventanilla única No. CE-563-17 de fecha 22/02/2017 y CE-1393-17 de fecha 31/03/2017, viéndose obligada a continuar dándole el manejo a los Inventarios del Municipio en hojas de Excel y no cumpliendo con la aplicación del manual de procedimientos en su actividad No. 7, por lo tanto el equipo auditor no acepta la contradicción y ratifica el hallazgo.					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p><b>empleador</b> y para uso del servidor en las labores propias del empleo que ejerce.</p> <p>En consecuencia no le asiste a la entidad una obligación de ingresar estos elementos al almacén toda vez que son constitutivos de factor prestacional y no elementos de la institución, habida cuenta que no se consideran ni elementos de consumo y mucho menos devolutivos.</p> <p>Como complemento de lo anterior para el 30 dic de 2016 el Software ASCCI no se encontraba en funcionamiento, debido a que la Administración había adquirido el nuevo Software SINAP, cuyo módulo de inventarios a esa fecha estaba recién instalado, pero apenas se encontraba para inicio del proceso de cargue y migración de datos con acompañamiento del proveedor del mismo.</p> <p>En vista de lo anterior, la Administración si estaba cumpliendo con su obligación legal de manejo, registro de ingreso y salida de sus inventarios, lo cual hizo temporalmente a través de la utilización de una herramienta tecnológica como son las hojas electrónicas de Excel, tal como lo expresa y corrobora el auditor en su observación preliminar, por lo tanto, no se trasgredió el Numeral 1 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002. Pues el deber legal es registrar el ingreso y salda de los inventarios, mas no dice la norma que obligatoriamente deba ser en un software específico, es decir que esa no es la única forma de cumplir con ese deber legal.</p>							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--



		<p>Esta situación temporal, se subsana para la presente vigencia con la utilización a plenitud del nuevo software adquirido por la Administración por Municipal.</p> <p>De otra parte se precisa que el almacén al ser el administrador y provisionador de los bienes de consumo de la Administración Municipal y para asegurar un adecuado uso de los elementos, desarrolla mecanismos para garantizar el ingreso y salida de los mismos, generando transparencia en los procesos y procedimientos, es por ello que para este fin se implementa la entrada y salida manual de la dotación, con soporte de recibido de todo el personal de la Administración que tiene derecho a la dotación de acuerdo a lo consagrado en el Decreto 1978 de 1989.</p> <p>Por los anterior solicito respetuosamente se desvirtué el hallazgo y su presunta incidencia disciplinaria.</p>							
4	<p>La Administración Municipal de Guacarí Valle, tiene la obligatoriedad de dar cumplimiento al Decreto 1978 de 1989, el cual hace referencia al suministro de dotación a sus funcionarios que devenguen menos de dos salarios mínimos, no obstante esta se debe suministrar cada cuatro meses y que para ello se fijaron las siguientes fechas, primer entrega 30 de abril, segunda entrega 31 de agosto y tercer entrega 30 de diciembre, se evidencio que con relación a las dotaciones correspondientes a la vigencia 2016, estas se fueron entregadas entre los meses de enero y febrero del 2017, como se observó</p>	<p>Con relación a esta observación Por razones de disponibilidad de recursos y acumulación de procesos administrativos y de contratación, solo hasta finalizando la vigencia de 2016, se puedo realizar cada proceso para dar cumplimiento al deber legal de entregar la dotación de labor tanto para varones, como para mujeres.</p> <p>Pero a pesar de la demora, se cumplió con tal deber, siguiendo las directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública, publicadas el 23 de febrero de 2015, que textualmente expresan lo siguiente: <i>“En caso de que el</i></p>	<p>Siendo la 4:53 de la tarde del día 22 de julio de 2017, se recibe vía correo electrónico la respuesta al derecho de contradicción de la DC-24-2017 CACCI-906, que en relación a la respuesta emitida por la Administración Municipal, donde expone que por razones de disponibilidad de recursos y acumulación de procesos administrativos y de contratación, realizo a destiempo la entrega de las dotaciones, lo que demuestra más aun una falta de planificación y control de</p>	X		X			

	<p>en los listados de entrega suministrados por la Supervisora de los contratos Dra. Paola Andrea Duque Molina, con relación a la vigencia 2017, no se ha iniciado trámite alguno para darle cumplimiento del precitado Decreto y que a la fecha de la visita todavía no se había realizado la entrega de la primera dotación a los funcionarios, la cual venció el día 30 de abril de 2017, siendo así las cosas es como se pudo configurar una Observación Administrativa con presunta Incidencia Disciplinaria al no dar cumplimiento del Numeral 1 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002 al trasgredir el Artículo 2 del Decreto 1978 de 1989.</p>	<p><u>derecho a la dotación haya sido causado, por tratarse de una obligación indiscutible de la entidad, y ésta no haya sido suministrada en las fechas establecidas por la norma, procederá en forma extemporánea su reconocimiento y pago directo de la misma en especie, siempre y cuando la obligación no haya prescrito y el empleado continúe laborando al servicio de la entidad”.</u></p> <p>En vista que la dotación correspondiente a la vigencia 2016 se recibió por parte del contratista el 30 de diciembre del mismo año y en cumplimiento de lo anterior la Administración realizó posteriormente la entrega a cada funcionario.</p> <p>Por lo anterior, no se trasgredió el Numeral 1 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, porque a pesar de la demora justificada, se procedió a cumplir con este deber legal.</p> <p>En cuanto a la vigencia 2017, en el mes de Marzo fue expedido el Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP, para que se adelantasen los procesos correspondientes para dotación de ropa y calzado para esta vigencia.</p>	<p>sus obligaciones como ente territorial, donde se pretende eludir la responsabilidad del cumplimiento en las fecha de entrega en una directriz de la función pública cuando esta no está por encima de una Ley y un Decreto que son los soportes legales que regulan la observación connotada, que del mismo modo se manifiesta que en relación a la vigencia 2017, se ha realizado la solicitud de una Disponibilidad Presupuestal, la cual nunca se fue aportada para demostrar la actuación, pues no se observó nunca ningún expediente de inicio de trámite del contrato para los fines de que trata la ley 70 de 1988 y el Decreto 1978 de 1989, por tanto el equipo auditor no acepta la respuesta al derecho de contradicción y ratifica el Hallazgo.</p>						
5	<p>Se pudo verificar que la Administración efectuó la entrega de las dotaciones a que está obligada mediante el Decreto 1978 de 1989, pero que los funcionarios beneficiados de este no están dando cumplimiento al artículo 7 del precitado Decreto, como tampoco a la circular interna No. 1000-16-01-38 de febrero 27 de 2017,</p>	<p>Con relación a la presunta omisión de los empleados beneficiados con el reconocimiento del vestido de labor es importante preciar que la evidencia que encuentre el auditor sobre el hallazgo debe ser organizada de manera que contenga los cuatro atributos del hallazgo de auditoria, es decir condición, criterio,</p>	<p>Siendo la 4:53 de la tarde del día 22 de julio de 2017, se recibe vía correo electrónico la respuesta al derecho de contradicción de la DC-24-2017 CACCI-906, que en relación a la respuesta emitida por la Administración Municipal, donde se expone que la</p>						

	<p>que en virtud del desacato por parte de algunos funcionarios, al no uso de las dotaciones la Administración Municipal no ha iniciado ningún tipo de Acción Disciplinaria, que demuestre exigibilidad de dichas normas, siendo así las cosas es como se pudo configurar una Observación Administrativa con presunta Incidencia Disciplinaria al no dar cumplimiento del Numeral 1 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002 al trasgredir el Artículo 7 del Decreto 1978 de 1989 y la Circular Interna No. 1000-16-01-38 de febrero 27 de 2017.</p>	<p>causa y efecto, por lo anterior el auditor debe asegurarse de que la evidencia sea suficiente, idónea, pertinente, y relevante, luego entonces de la redacción del hallazgo no se logra determinar que funcionarios portaban el uniforme y cuales no el día de la visita fiscal, pues una vez identificados los funcionarios podremos establecer si es beneficiario o no del calzado de vestido y labor y por supuesto se le asiste el deber de hacer uso del mismo, además de establecer si efectivamente tenían en su poder el uniforme o este había sido sujeto a cambio. Así las cosas no se pueden revelar la existencia de la observación toda vez que de la redacción de la misma no se observa claramente una relación de hechos que sean susceptibles de investigación.</p> <p>Además de lo anterior en la observación el auditor no precisa en qué casos puntuales encontró y que funcionarios específicos no estaban dando cumplimiento al uso correcto de la dotación, por lo tanto la observación es subjetiva y se recibe con extrañeza, puesto que frecuentemente la Secretaria de Desarrollo Institucional verifica que se esté dando uso apropiado a la dotación suministrada a los funcionarios y hace amonestación verbal para su uso correcto, si llega a observar que algún funcionario no lo hace en la forma que debiera, por lo tanto no se puede considerar de forma general de los funcionarios públicos del</p>	<p>evidencia no fue suficiente, idónea, pertinente, y relevante, se aclara que la muestra es aleatoria y no a la totalidad del personal, por lo tanto la escogencia queda a criterio del auditor seleccionando las personas del listado aportado por la Administración que tiene el derecho de la dotación, es así como una vez seleccionados se les realizo una entrevista y se pudo concluir con la observación manifestada a la Administración.</p> <p>Con relación a la puntualización de que personas se les efectuaron las entrevistas estas son parte de sumario de reserva de la entidad y que se aportan a la carpeta del expediente que se remite a la Procuraduría para que esta evalúe y profiera su concepto conforme al cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1978 de 1989 y la circular interna No. 1000-16-01-38 de febrero 27 de 2017, siendo así las cosas el equipo auditor no acepta la respuesta al derecho de contradicción y ratifica el Hallazgo.</p>	X		X			
--	---	---	--	---	--	---	--	--	--

		<p>Municipio beneficiados con la dotación que les entrega la administración, tengan como costumbre o conducta deliberada el desacato, reiterado de las instrucciones de uso correctos de su dotación de ropa y calzado de labor.</p> <p>En consecuencia la Administración no ha comprobado que algún funcionario tenga como costumbre el desacato de la aplicación de las normas que orientan el uso de su dotación, para que justifique la iniciación formal de un proceso disciplinario.</p> <p>De todas formas la Secretaría de Desarrollo Institucional, ha oficiado antes de la contestación de este documento, a la oficina de Control Interno Disciplinario del Municipio, para que revise y analice la aplicación del Decreto 1978 de 1989, y adelante los procesos disciplinarios correspondientes, de llegarse a comprobar que haya funcionarios que deliberadamente y por costumbre no estén dando cumplimiento al artículo 7 del precitado Decreto, como tampoco a la circular interna No. 1000-16-01-38 de febrero 27 de 2017, relacionada con el uso adecuado de la dotación entrega por la Administración Municipal.</p> <p>Por los anterior solicito respetuosamente se desvirtué el hallazgo y su presunta incidencia disciplinaria.</p>							
	<b>Total Hallazgos</b>			<b>5</b>		<b>4</b>	<b>1</b>		